

**Francisco José Barrionuevo Canto**► Presidente de Novasoft y del Consejo Social de la UMA
www.franciscobarrionuevo.eu**Siete días**

UN SOS PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Fondo Monetario Internacional ha mejorado sus previsiones de déficit público para España en 2012, poniéndolo al 5,1% del PIB. Aun así, esta cifra sigue estando por encima del dato oficial, que lo sitúa en el 4,4%, y que el Gobierno español se comprometió en su Plan de Estabilidad presentado a Bruselas.

Teniendo en cuenta lo anterior, los expertos en macroeconomía dirán que no sería conveniente refinanciar a las Administraciones Públicas (AAPP), pues de ese modo seguiría aumentando el endeudamiento financiero. No les faltaría razón si nos atenemos a una estrategia cortoplacista. Pero entiendo que los déficits se pueden recortar de tres maneras: la primera y más eficaz es reduciendo los gastos, la segunda es aumentando los ingresos y la tercera, y mejor de todas, sería reduciendo los gastos a la vez que aumentan los ingresos. Aunque todos quisiéramos quedarnos con el último escenario, es complicado pensar que se dará a tenor de la compleja situación por la que atraviesa la economía española.

En efecto, el Plan E tuvo su importancia y ayudó en su momento para dar aire a las empresas proveedoras de las AAPP, y a los propios ayuntamientos, que recibieron dinero para acometer las obras y servicios necesarios. Esta lluvia de millones de euros sentó bien a la economía. Sin embargo, ahora lo que toca es crear un FROPAP (Fondo de Reestructuración Ordenada para las Administraciones Públicas), dirigido únicamente a comunidades autónomas y ayuntamientos. Como requisito *sine qua non* para acceder a estas ayudas financieras: tener que presentar un plan de estabilidad. Al igual que España tuvo que hacer con Bruselas. ¿Qué destino? Pagar las deudas acumuladas de las instituciones con sus proveedores y acometer inversiones productivas: parques empresariales, incubadoras de empresas, mantenimiento de las infraestructuras actuales, inversiones que incentiven la economía digital, modernización, escuelas, hospitales, carreteras... Otra condición necesaria de los proyectos a presentar al FROPAP sería que el 50% de los fondos se apliquen para pagar deudas atrasadas, mientras que el resto se destine a nuevos proyectos de inversión.

Hay que colmatar cuanto antes el vacío que provoca la abultada deuda que mantienen las AAPP con sus proveedores. Esta situación hace un daño irreparable en los agentes económicos (empresas y bancos), pues en gran medida están financiando a nuestras instituciones sin pretenderlo, sobre todo las empresas. Puedo aseverar que si todas las empresas que mantienen una deuda reconocida de sus clientes AAPP cobraran de una tacada la misma, con total seguridad y desde el minuto uno de recibir el dinero dichas empresas (hablamos de miles de grandes, medianas y pequeñas empresas) crearían valor, no seguirían destruyendo puestos de trabajo, invertirían, e incluso se animarían a adquirir bienes de equipo, y por tanto crearían empleos directos e indirectos.

No se puede exigir a las empresas y a los bancos que sigan financiando a las AAPP *sine die*, y a la vez pedirles que abduquen de sus derechos de cobrar en tiempo y forma. Esto, además, conllevaría que la banca se viera en la tesitura de poner condiciones punitivas a las empresas a la hora de financiar su deuda de clientes AAPP.

Amén de todas las razones esgrimidas, es de justicia el que las empresas cobren su deuda y que las administraciones cumplan la Ley de Morosidad. El no hacerlo es ir en contra de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.